

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 18º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-116-2022  
CARATULADO : REUSCH/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO  
(3245-21)

Santiago, veintiocho de Abril de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N°326, oficina n°707, comuna de Santiago, compareciendo en representación de doña **MARGARITA MARÍA ADELAIDA REUSCH HEVIA**, enfermera, domiciliada en calle Nueva n°1496-D, comuna de Peñalolén, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas n°1225, piso 4°, comuna de Santiago.

Funda la demanda en base a los hechos descritos los cuales han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Menciona que doña Margarita María Adelaida Reusch Hevia, con registro en la Comisión Política y Tortura Valech 2 N°7221, nacida con fecha 24 de Noviembre de 1946, de actuales 75 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era secretaria y presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio de Enfermeras, trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad Zona Centro y era Militante del Partido Comunista.

Agrega que doña Margarita partió al exilio, una vez producido el Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973, con destino a Alemania, país del que pudo volver solamente en el año 1983. Desde su regreso al país, con una hija pequeña (el padre de la niña debió permanecer en Alemania en tanto no se le permitió su regreso al país), doña Margarita se incorporó activamente en distintos organismos que luchaban por la vuelta a la democracia y el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país.

En ese contexto, el día 26 de Noviembre de 1984 se presentó un recurso de amparo en su favor, rol 1993-84 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, debido a que ese día se presentaron en su domicilio dos civiles pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI), interrogándola sobre sus actividades y sobre algunas personas, tratándola en muy malos términos y amenazándola tanto a ella como lo que podrían hacerles a miembros de su familia, y posteriormente fue objeto de seguimientos por parte de éstos.



Luego, en el mes de Noviembre del año 1985, se presentó un nuevo recurso de amparo preventivo en su favor, rol 1469-85, por encontrarse gravemente amenazado y perturbado su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Dicho mes, su representada había sido notificada por detectives con el objeto de que compareciera en un proceso seguido en su contra ante la Tercera Fiscalía Militar de Santiago, rol 1526-85, por injurias a carabineros. Lo anterior con motivo de declaración pública que doña Margarita había emitido, junto a doña Gladys Corral (presidenta del Regional Santiago del Colegio de Enfermeras) en apoyo al ministro Sr. José Cánovas con motivo de sus avances en el caso degollados, referido al horrible asesinato de tres profesionales comunistas por parte de la Dicomcar en el mes de marzo del mismo año, uno de los cuales, don Manuel Guerrero, era su compañero de trabajo en la Vicaría. Con motivo de la causa indicada doña Margarita fue detenida el día 17 de marzo de 1986 y declarada reo por este supuesto delito, quedando en calidad de detenida en el Centro de Orientación Femenino, saliendo el libertad provisional el día 19 de Marzo de 1986, quedando con la obligación de ir a firmar a la Fiscalía Militar durante cuatro años, al principio debía asistir una vez a la semana, luego una vez al mes. Una vez detenida y en su paso por el Centro de Orientación Femenino, doña Margarita sufrió numerosos amedrentamientos, vejámenes y tortura psicológica, todo lo cual se mantuvo en el tiempo. De hecho, luego de salir en libertad, su representada comenzó a recibir numerosas llamadas telefónicas amenazantes para ella y su familia, lo que se mantuvo por un largo espacio de tiempo. Por este motivo, doña Margarita debió trasladarse a vivir a la casa de sus padres, para protegerse tanto a ella como a su hija, de sólo once años de edad a la época y refiere que, cuando dejaba a la niña en el colegio cada día, tenía mucho temor de que su hija fuera secuestrada y que le pasara algo.

Por otro lado, se instaló la desconfianza entre los vecinos. Pese a que ella, en su calidad de enfermera, siempre había ayudado a la comunidad, poniendo inyecciones o realizando curaciones, desde su detención comenzó a ser aislada por sus vecinos. Pasó a ser sospechosa y perdió su calidad de enfermera solidaria. Asimismo, luego de su detención doña Margarita limitó su energía y presencia como dirigente gremial y militante. Durante meses sufrió hostigamiento y tortura psicológica por parte de efectivos de la CNI, quienes vigilaban su casa desde una renoleta estacionada al frente, además de que la acción de ir a firmar permanentemente a la Fiscalía Militar de calle Zenteno, en el centro de Santiago, le produjo un sentimiento de humillación permanente, sintiéndose vigilada, controlada y sobretodo eternamente como culpable de un grave delito, percepción que aún mantiene.

Finalmente, se debe señalar que producto de las torturas psicológicas y amedrentamientos sufridos don Margarita, ésta ha padecido de delirio de persecución, inseguridad, temor, miedo, depresión y numerosas crisis de ansiedad. Hasta el día de hoy, con el sólo hecho de tener cerca o ver a un carabinero, aquello le produce un estado anímico crítico, lo que le significa un gran sufrimiento, sobresalto, inseguridad personal y



gran temor, además de que en las fechas significativas de que dan cuenta los hechos relatados, vuelve a vivir con gran intensidad la represión que vivió.

Sostiene que de los tormentos descritos se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el período del gobierno dictatorial. Añade que los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta y siete años de lo sucedido las personas continúan con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos, además de que muchos fueron obligados, directa o indirectamente, a abandonar el país, sin poder retornar, algunos incluso alejándose de sus familias.

En cuanto al derecho, menciona que el Estado de Chile es civilmente responsable ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Públicas o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública.

Alude que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”. En efecto, en el mencionado Informe Valech, sus representadas fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura.

Recalca que a la acción deducida no le resultan aplicables las normas de prescripción que contempla el Código Civil.

Concluye en mérito de lo expuesto y normas jurídicas citadas, tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas y privación ilegítima de libertad de que fue objeto, la suma de \$200.000.000 a doña Margarita María Adelaida Reusch Hevia, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Con fecha 29 de marzo de 2022, doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Opone excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el daño sufrido



por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la Ley 19.123 y las demás normas conexas (como la Ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123; y d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.- En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Afirma que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley 19.992 y sus modificaciones. Explica que dicha ley -y sus modificaciones- estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que los demandantes recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el



Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactoria mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.

Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

Señala que en este punto el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “*aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal*”.

Indica que lo anterior ha sido ratificado por la Excm. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:



*“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiere gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo– percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.*

En subsidio opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por la demandante, la detención ilegal, prisión política, apremios ilegales y torturas ocurrieron entre el día 26 de noviembre de 1984 y el 19 de marzo de 1986.



Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, 08 de marzo de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.



Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 01 de abril de 2022 obra réplica del actor, sin incorporar hechos sustantivos nuevos a la causa, refutando las excepciones, alegaciones y defensas planteadas por el demandado.

Con fecha 12 de abril de 2022 consta dúplica del demandado, donde procede a reiterar las alegaciones, defensas y excepciones expuestas en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio Especial de Hacienda, se omitió el llamado a conciliación.

Con fecha 19 de abril de 2022 y ampliada el 25 de noviembre del mismo año se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental que obra en autos.

El 10 de enero de 2023 se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N°326, oficina n°707, comuna de Santiago, compareciendo en representación de doña Margarita María Adelaida Reusch Hevia, enfermera, domiciliada en calle Nueva n°1496-D, comuna de Peñalolén, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas n°1225, piso 4°, comuna de Santiago, conforme fundamentos de hechos y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva acogerla a tramitación y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas, hostigamiento y amedrentamiento y privación ilegítima de libertad de que fue objeto, la suma de \$200.000.000 a la demandante, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

**SEGUNDO:** Que, doña Ruth Israel López, abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

**TERCERO:** Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

**CUARTO:** Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: copia de artículo denominado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago; copia de Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado





por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1; copia Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1; copia de antecedentes de carpeta de doña Margarita María Adelaida Reusch Hevia del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y copia de Informes de Efectos Psicológicos de doña Margarita Reusch Hevia suscritos el 14 de septiembre de 2022 por doña María Constanza Baladrón C. y doña Karla González Cáceres, ambas del PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Oriente;

**QUINTO:** Que, la parte demandada, a su turno, acompañó copia de Ord. DSGT N°4792-6202 de fecha 01 de abril de 2022 emitido por el Instituto de Previsión Social, que da cuenta de los beneficios de reparación Leyes N°s 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874 recibidos por doña Margarita Reusch Hevia.

**SEXTO:** Que, la demandante ha comparecido a estrados invocando su calidad de víctima de violación a los derechos humanos relatando una serie de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad ya descritos en la parte expositiva de este fallo, motivo por el cual reclama por esta vía el resarcimiento del daño que dicho episodio le ocasionó.

**SÉPTIMO:** Que, con el mérito de la contestación de la demanda, el documento citado en el considerando quinto de este fallo y la copia de las Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas y Nómina Reconocidas como Víctimas ambas emitidas por la Comisión Valech, se tiene por acreditado en autos que doña Margarita María Adelaida Reusch Hevia es víctima de violación a los derechos humanos, figurando bajo el N°7221 en el citado listado.

**OCTAVO:** Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 08 de marzo de 2022, ha transcurrido con creces el plazo



de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

**NOVENO:** Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de la demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

**DÉCIMO:** Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

**UNDÉCIMO:** Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

**DUODÉCIMO:** Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

**DÉCIMO TERCERO:** Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es, los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

**DÉCIMO CUARTO:** Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción.



**DÉCIMO QUINTO:** Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que los demandantes ya han sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley 19.123 –y sus modificaciones- que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

**DÉCIMO SEXTO:** Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en la afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral de la demandante, el que hicieron consistir, en síntesis, en el sufrimiento y angustia irrogada por las diversas vejaciones, humillaciones, torturas físicas y psicológicas, y amedrentamientos cometidas en su persona por agentes del Estado.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, en lo concerniente al daño, previamente es menester tener presente lo consignado en la documental aparejada por la actora consistente en el Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, elaborada por la Comisión Valech, oportunidad en la que se dispuso que *“La Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición”*; así las cosas, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de la demandante, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de los afectados y familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimará la alegación de suficiencia de pago.



**DÉCIMO NOVENO:** Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Magistrado observa una debilidad probatoria tendiente a acreditar el daño moral específico de la demandante, es del caso que encontrándose acreditada su calidad de víctima, en concordancia a lo expuesto en el Informe de Efectos Psicológicos elaborado por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la carpeta de antecedentes presentados ante el Instituto de Derechos Humanos, es posible entender que naturalmente ha sufrido una aflicción producto de los tratos inhumanos a que fuera expuesto por agentes del Estado, el que debe conforme a criterios de justicia y equidad ser indemnizado, mas no conociéndose detalladamente el grado de aflicción sufrido es que se estima prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de \$35.000.000 en favor de la actora.

**VIGÉSIMO:** Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Por estas consideraciones y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley 19.992, Ley 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral deducidas por la parte demandada;

II.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma \$35.000.000 en favor de doña Margarita María Adelaida Reusch Hevia, más los intereses y reajustes reseñados en el fundamento vigésimo de este fallo;

III. Que se condena en costas a la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Pronunciada por doña Lidia Ferrada Valdebenito, Jueza Subrogante.-



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Abril de dos mil veintitrés**

